Naciones Unidas S/PV.4750



Consejo de Seguridad

Quincuagésimo octavo año

Provisional

4750ª sesión

Martes 6 de mayo de 2003, a las 10.00 horas
Nueva York

Presidente:	Sr. Akram	(Pakistán)
Miembros:	Alemania	Sr. Pleuger
	Angola	Sr. Gaspar Martins
	Bulgaria	Sr. Raytchev
	Camerún	Sr. Banoum
	Chile	Sr. Valdés
	China	Sr. Zhang Yishan
	España	Sra. Menéndez
	Estados Unidos de América	Sr. Negroponte
	Federación de Rusia	Sr. Konuzin
	Francia	Sr. De La Sablière
	Guinea	Sr. Boubacar Diallo
	México	Sr. Aguilar Zinser
	Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte	Sir Jeremy Greenstock
	República Árabe Siria	Sr. Wehbe

Orden del día

La situación en el Afganistán

03-34660 (S)

Se abre la sesión a las 10.15 horas.

Aprobación del orden del día

Queda aprobado el orden del día.

La situación en el Afganistán

El Presidente (*habla en inglés*): Desearía informar al Consejo de que he recibido una carta del representante del Afganistán en la que solicita que se le invite a participar en el debate sobre el tema que figura en el orden del día del Consejo. Siguiendo la práctica habitual, desearía proponer que, con el consentimiento del Consejo, se invite a ese representante a participar en el debate, sin derecho a voto, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Carta y el artículo 37 del reglamento provisional del Consejo.

Al no haber objeciones, así queda acordado.

Por invitación del Presidente, el Sr. Farhâdi (Afganistán) toma asiento a la mesa del Consejo.

El Presidente (*habla en inglés*): De conformidad con el entendimiento alcanzado en las consultas previas del Consejo, entenderé que el Consejo de Seguridad decide cursar una invitación de conformidad con el artículo 39 de su reglamento provisional al Sr. Lakhdar Brahimi, Representante Especial del Secretario General para el Afganistán.

Invito al Sr. Brahimi a tomar asiento a la mesa del Consejo.

El Consejo de Seguridad comenzará ahora el examen del tema que figura en el orden del día. El Consejo se reúne de conformidad con el entendimiento alcanzado en sus consultas previas.

En esta sesión, el Consejo de Seguridad escuchará una exposición informativa del Sr. Lakhdar Brahimi, Representante Especial del Secretario General para el Afganistán, a quien doy la palabra.

Sr. Brahimi (*habla en inglés*): Es para mí un privilegio y un honor venir de nuevo a informar al Consejo sobre la situación en el Afganistán. Sr. Presidente: Es en particular un placer y un honor intervenir bajo su presidencia y le deseo mucho éxito este mes al frente del Consejo de Seguridad.

Como recordarán los miembros, la última vez que tuve el privilegio de informar al Consejo, en enero, señalé que el proceso de Bonn iba a enfrentarse a una prueba importantísima este año, con el telón de fondo del agravamiento de los problemas de seguridad, y que el Gobierno tendría que avanzar significativamente en esferas fundamentales como la reconciliación nacional, la creación de las estructuras necesarias y la reconstrucción nacional, con el apoyo de la comunidad internacional, para salvaguardar el éxito del proceso. Hoy, tengo que reiterar los problemas que expuse en enero, y ampliarlos, porque, pese a que algunas cuestiones concretas del proceso de Bonn están avanzando, en general el proceso se enfrenta al deterioro de las condiciones de seguridad, derivado de la intimidación y el hostigamiento diarios, los conflictos interétnicos y entre diversas facciones, la intensificación de las actividades de elementos vinculados al Talibán y a Gulbuddin Hekmatyar, y la economía de la droga. Otro problema es que numerosos afganos, quizá incluso la mayoría, consideran que las instituciones encargadas de la seguridad no sirven los intereses generales de toda la población.

Permítaseme hacer un resumen de algunas de las principales actividades que se están realizando estos días en el Afganistán. Los miembros verán que los problemas de seguridad están presentes en todo momento.

El padre de la nación, el antiguo Rey Zahir Shah, inauguró la Comisión Constitucional el 26 de abril, lo que constituyó una medida importante para cumplir con el plazo dispuesto en Bonn para la convocación de la Loya Jirga Constitucional. La Comisión consta de 35 miembros, siete de los cuales son mujeres, y representa toda la diversidad étnica, regional y religiosa de la población afgana. El Comité de Redacción que se estableció previamente ha redactado un proyecto de constitución preliminar, que presentará próximamente a toda la Comisión. Seguidamente, durante los meses de verano, la Comisión consultará con la opinión pública cuáles son sus opiniones y aspiraciones respecto de la Constitución. Para ello, los miembros de la Comisión tendrán que dividirse en subcomités, que visitarán todo el país y celebrarán múltiples reuniones multitudinarias y de menor envergadura con ancianos, líderes religiosos y de la comunidad, mujeres, intelectuales, comerciantes y ciudadanos de a pie. Las Naciones Unidas apoyarán estas actividades y participarán en ellas. Evidentemente, éstas sólo podrán realizarse si las carreteras reúnen las condiciones mínimas de seguridad, al igual que las ciudades y las aldeas del Afganistán. La Comisión se basará en sus conclusiones para ultimar un proyecto de constitución que presentará a la Loya Jirga Constitucional para su examen y ratificación. Esperamos que sea

en octubre. Naturalmente, para seleccionar a los participantes de la Loya Jirga y celebrar la Asamblea tendrán que darse las condiciones de seguridad necesarias y no registrarse actos intimidatorios ni de hostigamiento.

La convocación de elecciones, como se pidió en el proceso de Bonn, también será una empresa de gran envergadura. Estamos creando la dependencia electoral de la Misión de las Naciones Unidas de Asistencia al Afganistán (UNAMA) y hemos empezado a planificar, tempranamente, el censo nacional de votantes. El Gobierno tiene que hacer frente a considerables exigencias en materia de creación de instituciones en todas las esferas, de modo que el Afganistán todavía no ha desarrollado plenamente la capacidad electoral. Como pedía el Presidente Karzai al Secretario General en su carta de 15 de febrero, la dependencia electoral de la UNAMA tendrá que desempeñar una función fundamental durante todo el proceso electoral, además de ayudar a crear la capacidad del futuro órgano electoral.

Para celebrar las elecciones es preciso disponer de recursos sustantivos, ya que los procesos de empadronamiento y votación deben dar cabida, oportuna y equitativamente, a todos los afganos que reúnan los requisitos, tanto si se encuentran en el país como en las principales áreas de refugiados. Para que la UNAMA pueda planificar su asistencia en todas las fases del proceso electoral y prestarla eficazmente, nuestra dependencia electoral necesitará garantías de financiación mediante un presupuesto prorrateado. Pese a que los costos serán importantes, no constituirán más que una fracción de la totalidad de los costos del ejercicio electoral, y ya se ha preparado un presupuesto mayor, complementario, para la financiación voluntaria. Insto a los donantes y a los Estados Miembros a facilitar el apoyo necesario para este ejercicio fundamental ya que no se podrán iniciar los preparativos mientras no se disponga de los fondos necesarios.

La seguridad será incluso más vital para la preparación y la organización de las elecciones. Para elaborar el censo habrá que contratar y formar a unos 3.000 afganos, tanto hombres como mujeres, que tendrán que pasar algún tiempo en cada uno de los casi 400 distritos y visitar miles de aldeas. Al igual que ocurre con las consultas de la Comisión Constitucional, ello únicamente será posible si existen garantías de seguridad. Además, en todos los lugares, las elecciones dividen a la población y provocan tensiones. El Afganistán no será una excepción y, una vez más, la seguridad será esencial.

El Gobierno ha dado un paso adelante en lo que será un largo esfuerzo por controlar el cultivo de adormidera, cuyo principal suministrador en el mundo es el Afganistán. Asimismo, el Gobierno se encuentra en las últimas etapas de la estrategia nacional de fiscalización de drogas, de 10 años de duración, y recibe la asistencia del Reino Unido, la nación encargada de esta esfera. El Presidente ha pedido a todos los Ministros del Gobierno que apoyen el plan, que cuenta con programas de incentivos económicos para los agricultores, así como para la creación de la capacidad del Gobierno de hacer cumplir la ley. Huelga decir que la producción de opio y la economía de la droga son factores que contribuyen al clima de inseguridad y que, sin impedimentos, pueden socavar muchas de las iniciativas orientadas a la creación de instituciones y al establecimiento del imperio de la ley en el Afganistán.

La tasa de regreso asistido de refugiados al Afganistán ha vuelto a aumentar significativamente en el mes de abril, pese a no llegar a los niveles registrados durante el regreso masivo del año anterior. El Gobierno y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados estiman que este año regresarán unos 600.000 afganos del Pakistán, 500.000 del Irán y 100.000 de otros países.

Se ha avanzado en la elaboración del censo nacional, como se pidió durante el proceso de Bonn. La primera fase consiste en la actualización de los mapas, la localización de las viviendas del Afganistán y la confección de las listas consiguientes, así como la realización del recuento preliminar de la población. La primera fase concluirá en todo el país en la primavera de 2004 y servirá de base para planificar la fase II, a saber, la elaboración del censo propiamente dicho, que consistirá en recoger una amplia gama de información sobre los ciudadanos y permitirá disponer de la información demográfica y socioeconómica necesaria para la planificación y el desarrollo nacionales.

La apertura de las escuelas, el 22 de marzo, supuso el regreso de entre 4 y 5 millones de niños a las escuelas, una cifra sin precedentes frente a los 3 millones del año anterior, lo que constituyó una muestra de determinación y esperanza. El Ministerio de Educación, con el apoyo del UNICEF y de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), así como del Japón y de otros donantes, ha facilitado material escolar a más de 4 millones de niños y material pedagógico a más de 50.000 maestros de primaria. Se han producido varios incidentes de incendios de escuelas

femeninas, protagonizados por extremistas o debidos a rivalidades entre comandantes locales, probablemente a ambas cosas a la vez, pero que no tienen en cuenta el deseo de la mayoría de los padres de ver escolarizados tanto a los niños como a las niñas.

En el sector judicial, la Comisión de Reforma Judicial ha completado un estudio sobre el estado del sistema judicial en 10 provincias y centros urbanos importantes en el país. El equipo encargado del estudio de la Comisión se está centrando en la infraestructura y el funcionamiento del sistema oficial de justicia —incluido el personal, los procedimientos, los centros correccionales y de detención—, así como en el sistema informal de justicia. Se espera que el informe definitivo sobre el estudio esté disponible para finales de junio y proporcione una base para proyectos en el ámbito de los esfuerzos en pro de la reforma judicial, en que Italia participa como nación principal.

Con respecto a la reforma administrativa, los avances en la reforma de la administración pública, aunque lentos hasta la fecha, están tomando impulso gracias en gran medida al creciente papel de la Comisión de Administración Pública. Se está llevando a cabo un examen de las leyes administrativas vigentes, el cual proporcionará las bases para una definición del marco jurídico y el sistema de gestión pública que se va a aplicar a nivel tanto central como subnacional.

El sistema de las Naciones Unidas está adscribiendo a 140 funcionarios a diversas estructuras gubernamentales. En gran medida, el apoyo de las Naciones Unidas se ha centrado en los ministerios y otras entidades a nivel nacional. La UNAMA ha apoyado las funciones de planificación y elaboración de políticas del Ministerio de Rehabilitación y Desarrollo Rural. Otros organismos de las Naciones Unidas han centrado sus esfuerzos en el fomento de la capacidad de los ministerios de su contraparte respectiva. Además, se están fortaleciendo los sistemas financiero y de contabilidad a nivel tanto central como provincial.

Con respecto al Fondo Fiduciario para la reconstrucción del Afganistán, en el Foro Estratégico de Alto Nivel sobre el Afganistán celebrado en Bruselas en marzo de 2003, el Gobierno afgano presentó un presupuesto combinado de gastos periódicos y de desarrollo por valor de 2.200 millones de dólares para el año fiscal 1382, que va del 22 de marzo de 2003 a marzo de 2004. Al mismo tiempo, los compromisos de los donantes excedieron los 1.950 millones de dólares. Se trata de algo realmente muy alentador, aunque debe recordarse que se necesitarán recursos adicionales para partidas no presupuestarias críticas como las elecciones —que estimamos ascenderán a unos 80 millones de dólares—, y actividades en materia de minas y desarme, desmovilización y reintegración (DDR). El Gobierno sigue dependiendo de los fondos de los donantes para financiar el déficit del presupuesto ordinario.

Pasando a la reconstrucción en términos más generales, el final del invierno ha permitido que se inicien varios proyectos de reconstrucción. Entre éstos, el más importante es el esfuerzo internacional por rehabilitar caminos y carreteras esenciales. Para la carretera que conecta a Kabul con Herat pasando por Kandahar, se tiene planificado que el tramo Kabul-Kandahar quede terminado antes de diciembre de este año, mientras que en el segmento Kandahar-Herat se seguirá trabajando. Asimismo, un consorcio de donantes internacionales está financiando los caminos de Kabul a Kunduz y de Kabul al Pakistán, vía Jalalabad.

Se ha avanzado mucho en la aplicación de dos de los subprogramas nacionales prioritarios, el Programa Nacional de Empleo de Emergencia y el Programa Nacional de Solidaridad. El Banco Mundial apoya ambos programas, que están concebidos para inyectar fondos gubernamentales centrales a las economías locales. Se están finalizando los debates para la ejecución de los 75 millones de dólares del Programa Nacional de Empleo de Emergencia que se prevé destinar, en primer lugar, a proporcionar oportunidades de empleo productivo a las personas más vulnerables y, en segundo lugar, a desarrollar bienes de infraestructura mediante métodos basados en la mano de obra, utilizando un enfoque en el que el sector privado lleva la dirección. El Programa Nacional de Solidaridad comenzó oficialmente en abril. En el momento de su puesta en marcha, el Gobierno había recibido más de 11 millones de dólares para este programa, cuyo objetivo es habilitar a las comunidades locales mediante la asignación directa de fondos de desarrollo.

Por lo que atañe a la situación de derechos humanos, la Comisión Independiente de Derechos Humanos del Afganistán ha tomado medidas alentadoras para ampliar su programa de trabajo, y tiene ahora oficinas satélites abiertas en Herat, Bamyan, Mazar-e-Sharif, Jalalabad y Gardez. En un futuro próximo se abrirán otras en Kandahar y Faizabad. La Comisión, con la asistencia de la UNAMA, está investigando activamente informes sobre violaciones de los derechos

humanos en todo el Afganistán. Por otra parte, el Afganistán ratificó, el 4 de abril de 2003, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Con ello se ha enviado un mensaje alentador a los promotores de los derechos de la mujer, tanto dentro como fuera del país, para que incrementen su labor de promoción y protección de esos derechos en el Afganistán. Asimismo, es positivo que la Autoridad de Transición afgana promulgó una nueva ley que concede a los afganos el derecho a celebrar asambleas públicas o hacer huelgas. Por otra parte, el Afganistán ratificó el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

No obstante, pese al progreso gradual en algunas esferas, la situación de derechos humanos a la que se enfrentan los afganos en todo el país sigue siendo grave. En Herat, la UNAMA está investigando presuntos casos de ejecuciones sumarias, violaciones sexuales y otras formas de violencia sexual, así como la constante intimidación política de periodistas y agentes de la sociedad civil. En Laghman, varias mujeres que participaban en celebraciones del Día Internacional de la Mujer fueron golpeadas por grupos armados presuntamente vinculados con las autoridades, y la jefa del Departamento de Asuntos de la Mujer en Laghman recibió varias amenazas contra su vida procedentes, al parecer, de remanentes de los talibanes, que la conminaron a poner fin a todas las actividades en la provincia. Asimismo, en la provincia de Logar se han confirmado informes de intimidación contra mujeres delegadas a la Loya Jirga de Emergencia.

En el norte, en particular, en las provincias de Faryab y Jawzjan, los combates y la inseguridad han causado nuevos desplazamientos de familias de pashtunes a Kandahar y al campamento de desplazados internos de Zar-a-Dasht en el sur. En la provincia de Takhar, los comandantes locales han impedido el retorno de familias pashtunes a sus aldeas, mientras que en el norte de la provincia de Kunduz, se ha impedido a los pashtunes que cultiven sus tierras, y se los ha amenazado con obligarlos a desplazarse. La Autoridad de Transición, la Comisión de Derechos Humanos, la UNAMA, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Comisión de Regreso para el Norte están tratando de ayudar a resolver esas tensiones. Sin embargo, la continua inseguridad y la falta de instituciones estatales eficaces siguen siendo lamentablemente la regla y no la excepción. Debido a estas condiciones, no sólo los comandantes locales y los funcionarios gubernamentales pueden actuar con impunidad sino que, además, se corre el riesgo de socavar el todavía frágil proceso de paz y la confianza de los afganos en dicho proceso.

Ésta no es lamentablemente una lista exhaustiva de las violaciones de los derechos humanos en el Afganistán en el período de que se informa. Las organizaciones internacionales de derechos humanos y los activistas a menudo expresan su condena y su indignación ante los casos de abusos graves. También expresan su frustración ante lo que perciben como falta de medidas para corregir la situación. Evidentemente, aplaudimos ese interés y compartimos esos sentimientos. Con todo, es importante señalar en este sentido que no hay soluciones rápidas. El camino correcto es trabajar con determinación y paciencia para ayudar al Afganistán a construir los instrumentos y las instituciones que le permitan poner fin a las violaciones de derechos humanos; crear una policía y un ejército nacionales; reactivar el sistema judicial y garantizar el imperio de la ley; y ayudar a que la Comisión Independiente de Derechos Humanos del Afganistán se convierta en el organismo de vigilancia respetado y eficaz que necesita el país.

La seguridad —que proyecta una larga sombra en todo el proceso de paz y, de hecho, en todo el futuro del Afganistán—, es la cuestión fundamental. La situación de la seguridad ha sido un tema constante en mis exposiciones informativas al Consejo y, lamentablemente, como ya he dicho, debo informar a los miembros de que sigue siendo inestable e insuficiente en muchas zonas del Afganistán. Son demasiado frecuentes las rivalidades entre facciones y comandantes locales, la impunidad en lo que respecta a las violaciones de los derechos humanos y el acoso diario de los ciudadanos afganos ordinarios, tanto por los comandantes como por las fuerzas locales de seguridad.

Además, ahora casi a diario se producen ataques de grupos hostiles al Gobierno central y a quienes lo apoyan. Algunas fuerzas que, según se cree, están asociadas con los talibanes, Al-Qaida y Hekmatyar han venido aumentando las operaciones contra la coalición y contra objetivos afganos militares y no militares en el sur, el sudoeste y el este del país. El 3 de mayo un ciudadano miembro de una organización no gubernamental de remoción de minas recibió un disparo mortal y otro resultó gravemente herido cuando se abrió fuego contra su vehículo de trabajo en la carretera principal que va de Kabul a Kandahar, en la provincia de Wardak. Las autoridades locales están investigando los hechos. Las

personas que atentan contra estos funcionarios heroicos dedicados a la remoción de minas no son enemigos del Gobierno del Afganistán o de la coalición, y no son extranjeros. Son enemigos de los agricultores afganos, que están esperando que se limpien sus campos, de los niños afganos, que quieren jugar sin poner en peligro sus vidas. De hecho, quienes atentan contra los funcionarios de remoción de minas son los enemigos de toda la nación afgana.

Se han producido tensiones y enfrentamientos armados en la última semana de abril en la provincia de Zabul, aunque todavía se desconocen las causas de la violencia. A principios de abril, un destacado anciano de una tribu local, Akhundzadah Jailani Khan, fue asesinado. La mayoría cree que los responsables del asesinato han sido los talibanes debido a la estrecha relación de ese hombre con el Presidente Karzai. Una semana después, un familiar del Gobernador de Kandahar, junto con un guardaespaldas, fueron asesinados por presuntos militantes talibanes, no en territorio afgano sino en la ciudad pakistaní fronteriza de Chaman. Las fuerzas de la coalición han sido objeto de ataques periódicos, y cuatro de sus integrantes han sido asesinados en las últimas semanas. Muchos más miembros de las fuerzas regionales afganas de seguridad en el sur han muerto en combate y como consecuencia de asaltos en sus puestos de guardia.

El 6 de marzo dos vehículos de la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad (ISAF) fueron alcanzados por un explosivo detonado por control remoto que causó la muerte de un intérprete de la ISAF e hirió a un soldado. El artefacto tenía un nivel de perfeccionamiento que jamás se había visto en este tipo de incidentes en el Afganistán. A finales de marzo, el complejo de la sede de la ISAF en la capital recibió un impacto directo de un misil pero, por suerte, no hubo víctimas. Nueve días después, cayeron cohetes a pocos metros de otro complejo de la ISAF en la ciudad, y el 13 de abril se hizo detonar un artefacto explosivo cuando pasaban dos vehículos de la ISAF. Una vez más, la ISAF tuvo la gran suerte de que su personal no sufriera ninguna herida, y nosotros también tuvimos suerte.

La amenaza que plantean estos grupos a la comunidad internacional se dejó sentir en nuestro país con el espeluznante asesinato, a sangre fría, de un trabajador del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) a finales de marzo. Fue el primer asesinato de esa clase de un extranjero desde 1998. Poco después de este incidente fue asesinado otro extranjero, un visitante italiano, en la provincia de Zabul. En efecto, ha habido un número creciente de ataques dirigidos contra las organizaciones de ayuda extranjeras y contra las Naciones Unidas. El 16 de abril se lanzó una granada a un complejo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en Jalalabad. Ocho días después, se arrojó un artefacto explosivo a un despacho de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, también en Jalalabad. Por suerte, en ninguno de estos dos incidentes hubo heridos. El 22 de abril un vehículo de actividades de remoción de minas de las Naciones Unidas fue objeto de fuego continuo y selectivo con armas pequeñas en la carretera que va de Kabul a Jalalabad en un punto no lejos de Kabul, cerca del paso de Sarobi. En este incidente resultaron heridos dos de los tres ocupantes del vehículo. Se disparó contra las personas que trataban de socorrer a los empleados de las Naciones Unidas para que no pudieran ayudar a los heridos.

A medida que estos ataques contra organizaciones no gubernamentales e internacionales son cada vez más numerosos y más amenazadores, aumenta la presión para suspender o retirar las operaciones. El CICR y algunas organizaciones no gubernamentales ya están reduciendo sus operaciones en el sur, con consecuencias inmediatas para programas clave que ofrecen apoyo a las poblaciones locales. Actualmente las Naciones Unidas también están llevando a cabo un examen decisivo de sus operaciones y de sus medidas de seguridad. Mis colegas y yo mismo hemos indicado al Gobierno y a la comunidad diplomática de Kabul que, mientras no haya miedo, ciertamente no seremos irresponsables. Proseguiremos con las operaciones en todas las zonas, allí donde se pueda y en la mayor medida posible pero, naturalmente, no podemos garantizar que las Naciones Unidas y otras organizaciones de ayuda civiles mantendrán los niveles de actuación existentes si no se puede garantizar la seguridad de su personal. Esperamos que haya un mejor intercambio de información entre las Naciones Unidas y las autoridades de la coalición y del Gobierno y que se refuercen las medidas para mejorar la seguridad allí donde estén actuando trabajadores civiles de ayuda.

Los vecinos del Afganistán desempeñan un papel decisivo para ayudar a garantizar que se mantenga la seguridad del país, y la declaración que firmaron el 22 de diciembre de 2002 constituye una importante expresión de solidaridad por su parte en ese sentido. Como el

Consejo sabrá, hay informes preocupantes en los que se señala que ciertos grupos hostiles están entrando en el Afganistán por las fronteras orientales y meridionales. El Pakistán ha manifestado su disposición constante a hacer frente a ese problema, y el despliegue de sus fuerzas armadas en las zonas fronterizas es un ejemplo concreto de ello. Tuve el privilegio de reunirme con el Presidente Musharraf en marzo, y me reafirmó su enérgico apoyo al Presidente Karzai y a su Gobierno. También dijo que estaba dispuesto a debatir todas las cuestiones y a cooperar plenamente con las autoridades afganas, especialmente en la esfera de la seguridad. El 22 de abril el Presidente Karzai visitó Islamabad. Creo que sus conversaciones con el Presidente Musharraf han sido oportunas, importantes y sumamente útiles para consolidar una cooperación y relaciones fraternales entre los dos países. Espero sinceramente que éstas y todas las demás relaciones regionales y bilaterales del Afganistán se estén robusteciendo sistemáticamente con miras a proteger la frágil paz del país.

La seguridad también se ve agravada por los enfrentamientos constantes entre facciones. En las provincias de Badghis y Faryab los últimos acontecimientos han causado la muerte de más de 50 personas. Según los informes, 15 mujeres y niños de Bala Murghab, en Badghis, se ahogaron en un río cuando huían de sus agresores, mientras que las casas y las tiendas de las aldeas de la zona eran saqueadas según una pauta continua de violaciones de los derechos humanos dirigidas contra los pashtunes de la zona. En Maimana, la lucha entre las facciones opuestas Jumbesh y Jamiat volvió a estallar en una nueva manifestación de su contienda por el dominio en el norte, que ha atemorizado a la población. La impunidad de que gozan los autores de esos crímenes amenaza con dañar la integridad del proceso de paz y el apoyo con el que cuenta el Gobierno.

Es evidente que la solución definitiva a esos problemas consiste en crear fuerzas de seguridad afganas que puedan garantizar la paz.

El Presidente Karzai, en su reciente discurso a la nación afgana, colocó una vez más firmemente en el centro de su programa de Gobierno la reforma del sector de la seguridad. El Presidente anunció que el 22 de junio se iniciaría un programa de desarme, desmovilización y reintegración que sería ejecutado por el Programa para un nuevo Afganistán, que cuenta con el respaldo de la comunidad internacional y está encabezado por el Japón y las Naciones Unidas. En el programa previsto de desarme, desmovilización y reintegración participarán oficiales y soldados que actualmente forman parte de cuerpos militares que están bajo la autoridad del Ministerio de Defensa, hasta un máximo de 100.000 efectivos.

Sin embargo, antes de que pueda comenzar a ejecutarse el programa de desarme, desmovilización y reintegración, es preciso que se ponga en práctica la letra y el espíritu del decreto presidencial de 1º de diciembre de 2002 sobre el establecimiento del ejército nacional con respecto a la reforma del Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior y las estructuras de los servicios de inteligencia. Se han hecho progresos alentadores en cuanto a la formación del nuevo ejército nacional y el servicio de policía nacional, con la asistencia principalmente de los Estados Unidos y Alemania, respectivamente. No obstante, esos esfuerzos y el programa nacional de desarme, desmovilización y reintegración podrán tener éxito únicamente si se consigue que todos los afganos tengan confianza en que en las nuevas estructuras del sector de la seguridad habrá lugar para ellos y que en ellas se tendrán en cuenta los intereses de toda la nación. Los nombramientos efectuados recientemente en el Ministerio de Defensa son un primer paso, tímido pero alentador, hacia la corrección del desequilibrio étnico en esa institución fundamental en la esfera de la seguridad, aunque todavía queda mucho por hacer antes de que la mayoría de los afganos reconozca dichas instituciones como auténticamente nacionales.

Además, pesa una seria responsabilidad sobre los principales líderes militares del Afganistán, quienes se reunieron en Kabul el 19 y 20 de abril provenientes de todos los rincones del país para deliberar acerca de la formación del nuevo ejército nacional. Sus palabras de apoyo a la creación de un nuevo ejército multiétnico deben ahora traducirse en hechos con la desmovilización de sus propias fuerzas a fin de asegurar que el nuevo ejército esté bajo control civil y constituya el único instrumento de fuerza restante en el país. Los líderes de las facciones tendrán que hacer frente a sus responsabilidades si quieren formar parte del nuevo Afganistán. Para ello, tendrán que renunciar verdaderamente a las antiguas costumbres, ya que en el nuevo Afganistán no puede haber lugar para ejércitos particulares, cárceles privadas, detenciones arbitrarias, brutalidad y corrupción ni para la discriminación por razones étnicas o de otra índole. Creo que los asociados del Afganistán, comenzando por sus vecinos, aunque

no limitándose a ellos, deben indicar en términos inequívocos que la comunidad internacional no tratará con los líderes de facciones, cualquiera sea el título oficial que puedan tener. Todos debemos dejar muy en claro que tratamos exclusivamente con el Gobierno del Presidente Hamid Karzai y con las personas que son leales a ese Gobierno tanto en palabras como en actos.

No puede esperarse que las incipientes instituciones en la esfera de la seguridad estén a la brevedad en condiciones de garantizar la seguridad que los afganos necesitan desesperadamente. El desarrollo de las nuevas instituciones de seguridad después de que fueran destruidas por más de 20 años de guerra cruenta es un proceso lento y minucioso. Desde la celebración de la Conferencia de Bonn ha sido una premisa fundamental que el proceso de Bonn necesita apoyarse en un entorno cada vez más sólido en materia de seguridad. Durante el primer año del proceso de paz, la atención se concentró en la capital, Kabul, donde la presencia de la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad (FIAS) durante los 16 meses pasados garantizó la estabilidad necesaria para la celebración de la Loya Jirga de Emergencia y para comenzar a restablecer las instituciones del Gobierno central. No obstante, ahora el resto del país debe experimentar una mayor seguridad para evitar que el apoyo al Gobierno y al proceso de Bonn se vea peligrosamente erosionado. Las próximas etapas del proceso de Bonn deben, por naturaleza, ser de amplia base y abarcar todo el país. La inscripción de votantes este año y la celebración de elecciones en 2004 y el proceso de consulta y debate nacional sobre la nueva constitución son acontecimientos que requerirán un buen nivel de seguridad en todo el territorio del Afganistán. El desarme y la desmovilización, de por sí condiciones previas indispensables para unas elecciones libres e imparciales, no pueden llevarse a cabo con éxito si la confianza local se ve deteriorada por la inestabilidad y la inseguridad.

En vista de ello, pido una vez más al Consejo que considere cuidadosamente qué medidas pueden tomarse en el plano internacional para garantizar la seguridad que se necesita para que el proceso de Bonn se desarrolle eficazmente. La FIAS ha demostrado su eficacia en Kabul, pero la reciente serie de incidentes ha demostrado que la inseguridad fuera de Kabul puede ir infiltrándose en la capital. El Secretario General y yo hemos recomendado que se extienda la FIAS más allá de Kabul y creo que ello sigue siendo parte de la posible respuesta a la cuestión de la seguridad para el proceso de Bonn. Pienso también que los equipos de reconstrucción provincial desplegados por la coalición pueden desempeñar un importante papel en la respuesta al problema relativo a la seguridad.

Además, la inseguridad en las provincias podría enfrentarse mejor con una mayor presencia de policías afganos. El nuevo Ministro del Interior, Ali Ahmad Jalali, está insuflando nueva energía al excelente programa elaborado por Alemania como nación líder para la formación de la policía nacional. El Presidente aprobó para el Ministerio del Interior una nueva estructura por la que se racionaliza la institución y se crea una línea de autoridad y control mucho más clara y eficiente entre Kabul y las provincias. Además, se consolidan todas las funciones policiales bajo la autoridad del Ministerio del Interior. Se está trabajando para crear una patrulla de carreteras que garantice la seguridad en todos los caminos y carreteras del Afganistán. El Ministro espera también organizar una fuerza de policía de reacción rápida que pueda desplegarse velozmente en cualquier parte del país. Este concepto ya se ha puesto a prueba en Maimana, adonde se envió una pequeña fuerza para que actuara como presencia neutral de seguridad tras los combates a los que me he referido anteriormente.

No obstante, esas meritorias iniciativas requieren dinero y, a la fecha, el nivel del compromiso de los donantes con el Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para el orden público en el Afganistán es insuficiente para que el Ministerio del Interior pueda fortalecer efectivamente la policía afgana. De los 120 millones de dólares que se espera que cubra el Fondo Fiduciario hasta junio del año próximo, a la fecha sólo se han depositado en el Fondo 11 millones de dólares y se han prometido unos 35 a 40 millones de dólares más.

Pienso que el Consejo estará de acuerdo en que nunca se esperó que el proceso de Bonn fuera fácil. Vacilaciones, dudas, frustraciones y retrocesos son parte de esta empresa. Los progresos logrados hasta ahora han sido considerables, si se tiene en cuenta el estado en que se encontraba el país después de tres decenios de inestabilidad y más de dos decenios de brutal guerra civil. No obstante, ahora debemos tener cuidado para no dejar que los peligros que actualmente acechan al proceso de paz y el aumento del número de afganos que están descontentos con el estado de su nación socaven esos progresos. Los beneficios de la paz todavía se concentran principalmente en Kabul y los dividendos de la paz aún son inasequibles para la gran mayoría de los afganos.

Como recalqué hoy, hay muchas señales de que la situación en materia de seguridad en todo el Afganistán está empeorando precisamente ahora que se necesita que mejore para llevar a cabo las próximas etapas del proceso de Bonn. Existe el riesgo real, pero todavía evitable, de que el proceso de Bonn se estanque si la seguridad no se extiende a todas las regiones del país y de que los afganos pierdan fe en el Gobierno central si éste no puede protegerlos. No pueden lograrse progresos adicionales en un vacío en materia de seguridad y, si no se logran, aumentará la insatisfacción. La reconstrucción y la recuperación también se están viendo obstaculizadas por la inseguridad en el sur y en otras partes, y esto contribuirá, en un círculo vicioso, a un mayor descontento, al aumento de la delincuencia y, a su vez, a una mayor inseguridad.

El Gobierno puede, y debe, hacer su parte para encarar esta situación. Un elemento clave para ello es lograr reformas que garanticen que todos los afganos puedan apoyar las instituciones del Gobierno y sentirse responsables de protegerlas. A fin de contribuir al proceso de paz, quienes no se oponen a él y están comprometidos con el uso de medios no violentos deben recibir espacio político e igualdad de oportunidades, con independencia de su afiliación política o étnica. Donde haya grupos que consideren que han sido marginados del proceso, habrá caldo de cultivo para el sustento de quienes están comprometidos con la oposición violenta. Por ende, la creación de las condiciones necesarias para una participación verdaderamente nacional en ese proceso en los próximos meses reviste suma importancia.

Creo que el Presidente Karzai y sus colegas en el Gobierno son muy conscientes de que es preciso rectificar con urgencia las percepciones ampliamente compartidas de injusticia y discriminación por motivos étnicos o de otra índole. El Presidente Karzai se refirió a esto con fuerza en un discurso pronunciado la semana pasada ante una asamblea de dirigentes religiosos. En particular, recordó a su auditorio, y al país en general, que en el proceso político debe haber cabida para todos, incluidas aquellas personas que podrían haber prestado servicios al régimen de los talibanes, si dichas personas realmente apoyan la paz y la unidad nacional. El Presidente y sus ministros deben actuar ahora. Espero que el Consejo de Seguridad, los vecinos del Afganistán, la comunidad internacional en su conjunto y todos los que trabajamos en el terreno con el pueblo afgano hagamos la parte que nos corresponde en apoyo a este gran esfuerzo en este momento tan crítico.

El Presidente (*habla en inglés*): Doy las gracias al Sr. Brahimi por su exposición informativa tan completa al Consejo, y por las amables palabras que me ha dirigido.

De conformidad con el entendimiento alcanzado en las consultas previas del Consejo, invito ahora a los miembros del Consejo a celebrar consultas oficiosas para proseguir con nuestro examen del tema.

Se levanta la sesión a las 11.05 horas.